SECCIÓN III
RESPONSABILIDAD SOCIAL PÚBLICA
(RSP)

Las organizaciones y sus *stakeholders* en su marco institucional. La perspectiva ecuatoriana

MARÍA FERNANDA ORQUERA CARRANCO*
CRISTINA FERNANDA ACUÑA BERMEO**
Ecuador

Resumen

Este trabajo busca caracterizar las relaciones estratégicas entre las organizaciones socialmente responsables ecuatorianas y sus *stakeholders*, describir el marco institucional donde se desarrolla dicha relación y la importancia que le dan las empresas a los diferentes pilares de la sostenibilidad.

Introducción siglo

Ya desde fines del xx la humanidad comenzó a cuestionar el modelo de desarrollo que empezaba a lanzar sus primeras señales de alerta frente a las situaciones económicas (Dos Santos & 19, 2012; Correa Olivo & Ibarra Mares, 2009; Kliksberg, 1997). El mundo comenzaba a tener

* Master en Administración, Universidad Federal de Rio Grande do Sul. Doctoranda del programa Doctoral de Ciencias Económicas en la Universidad de Buenos Aires. Contacto: mafe.orquera.carranco@gmail.com.

** Maestra en Administración por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Docente titular en la Facultad de Ciencias Administrativas de la Escuela Politécnica Nacional. Contacto: cristina.acuna@epn.edu.ec

conciencia de los impactos en la naturaleza y en la sociedad de los sistemas productivos extractivistas que pensaban en la maximización de los rendimientos financieros. Fue en 1987 en el marco de la World Commission on Environment and Development (WCED) que se define el desarrollo que el mundo necesitaba. En el documento “Our Common Future”, la Comisión Brundtland, afirma que “el desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades” (WCED, 1987). Desde aquella época y hasta la presente los gobiernos y las empresas están sufriendo constantes presiones de grupos interesados para que sus operaciones sean responsables con el medio ambiente y el entorno social y se los ha denominado como grupos de interés o *stakeholders*, que clásicamente son definidos por Freeman (1984) como cualquier grupo o individuo que afecta o es afectado por los alcances de los objetivos de la empresa. Considerando lo anterior y en pos de alcanzar un desarrollo sostenible que permita la perpetuidad de las empresas, los gestores adoptan estrategias de negocio que consideren resultados económicos, sociales y ambientales a través de la adopción de comportamientos éticos empresariales que toman en cuenta a los *stakeholders* para el desarrollo de alianzas estratégicas y/o minimizar los conflictos, este tipo de estrategias se conocen como Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y están siendo aplicadas por muchas empresas a nivel mundial respondiendo a sus marcos institucionales particulares y a las características locales de sus países.

En este contexto, esta investigación se plantea la pregunta ¿cuál es la relación de las organizaciones ecuatorianas que adoptan la Responsabilidad Social Empresarial con sus *stakeholders* en el marco institucional; con el objeto de caracterizar la relación de las organizaciones ecuatorianas que adoptan la Responsabilidad Social Empresarial con sus *stakeholders* y el marco institucional donde se desarrolla dicha relación?

Metodología

Esta investigación en particular surgió del deseo de caracterizar la relación de las organizaciones ecuatorianas que adoptan la Responsabilidad

Social Empresarial con sus *stakeholders* y el marco institucional donde se desarrolla dicha relación. Para ello se realizó una investigación que combinó el análisis de datos primarios y secundarios. Para la etapa de datos primarios se entrevistó a expertos en Responsabilidad Social Empresarial relacionados a empresas en Distrito Metropolitano de Quito. Los entrevistados fueron el Consorcio Ecuatoriano para la Responsabilidad Social (Ceres), el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial (Irse), y la empresa líder en Responsabilidad Social Empresarial en el Ecuador (Pronaca). Una vez realizadas las entrevistas se procedió a analizar las respuestas a través de análisis de discurso. Para la etapa de análisis de datos secundarios se examinaron varios documentos siendo la principal fuente de información las memorias de sostenibilidad elaboradas por las empresas ecuatorianas en el año 2015 disponibles en la base de datos del Global Report Initiative (GRI), las páginas web de las empresas que presentan sus memorias de sostenibilidad, la Constitución, las leyes, las normativas y ordenanzas vigentes en el Ecuador y en el Distrito Metropolitano de Quito.

La normativa ecuatoriana en el contexto de la Responsabilidad Social Empresarial

Como primera parte del trabajo se analizó el marco institucional en el que las empresas ecuatorianas desarrollan las estrategias relacionadas a la Responsabilidad Social Empresarial. De acuerdo con la base de datos de divulgación de GRI (2016), el Ecuador es uno de los países que cuenta con políticas a nivel nacional referentes a regulaciones del mercado, transparencia de las empresas en temas financieros y no financieros, lo cual se ve reflejado en la Constitución de la República, seguida por el Plan Nacional de Desarrollo, las leyes nacionales y las ordenanzas de responsabilidad social empresarial del Distrito Metropolitano de Quito.

La nueva Constitución de la República del Ecuador fue elaborada y aprobada en el año 2007 para luego ser respaldada en referéndum a través de una consulta popular en el año 2008. La Nueva Constitución nació con algunas innovaciones en derecho (Lima y López, 2012),

ya que el cuerpo legal creado en torno a esta camina por cuatro dimensiones de manera transversal que son: 1) la relación con el medio ambiente, 2) la relación entre el Estado, la sociedad y la empresa y terceras personas, 3) la participación de usuarios, público externo y la empresa, y 4) las relaciones del trabajador y las empresas público privadas. Según Grijalva (2009), la Constitución hace mención a varios puntos de los que se ocupa la Responsabilidad Social Empresarial, haciendo énfasis a los pilares social y ambiental del Triple Bottom Line y los mayores cambios que se pueden observar del mencionado cuerpo normativo se agrupan en tres grandes áreas: 1) el rol del Estado en la economía, 2) los derechos y garantías y 3) la plurinacionalidad y la participación ciudadana.

En lo que respecta al rol del Estado en la economía Grijalva (2009), destaca el reconocimiento de la economía popular y solidaria y la prioridad de esta en las contrataciones del Estado, la priorización de la producción nacional, el incentivo de las exportaciones, la restricción de importaciones selectivas y en la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, sobre el rol del Estado existen criterios antagónicos en el mundo empresarial, los críticos opinan que la Constitución del 2008 distorsiona los mercados y genera ineficiencia económica con altos costos sociales, mientras que quienes están a favor de las propuestas constitucionales ven en la Constitución mecanismos para lograr que los mercados atiendan a objetivos sociales y ambientales tradicionalmente olvidados.

En cuanto a derechos y garantías se puede ver la manera en la que la Constitución se enfoca fuertemente en los tres pilares. Esto se ve en la disposición constitucional de que los derechos están vinculados al concepto andino de Sumak Kawsay o Buen Vivir, el cual es entendido en la Constitución como un modelo de desarrollo pensado en el desarrollo del ser humano, el respeto a la naturaleza y la búsqueda de un desarrollo económico sin pretender la acumulación de la riqueza, sino en su repartición equitativa esta. En este orden de ideas, la Constitución ecuatoriana fue la primera en sentar en su texto los derechos de la Naturaleza (Cóndor Salazar, 2016), reconociéndola como un ser desde la cosmovisión andina donde es considerada un ser femenino llamado Pacha Mama. Los derechos de la naturaleza están acompañados por

el derecho al agua, a la alimentación y a la soberanía alimentaria, a la salud, el derecho al trabajo autónomo con restricciones a negociaciones colectivas, entre otros aspectos.

En lo que respecta a la plurinacionalidad y participación ciudadana, la Constitución señala que los pueblos originarios son considerados nacionalidades, lo que convierte al Ecuador en un país plurinacional. Las nacionalidades o comunidades pueden reclamar derechos colectivos como, entre otros, el respeto a su alimentación, sus modelos de justicia, las extracciones de recursos de sus territorios. Por otro lado, la participación ciudadana fue elevada a la categoría de función del Estado, la cual consiste en ser responsable de vigilar éticamente el comportamiento de las demás funciones, evitando así actos de corrupción principalmente en el sector público. Adicionalmente, la Constitución da pie al uso de otros mecanismos de participación ciudadana como la audiencia pública, cabildos populares, asambleas, consejos consultivos, observatorios y veedurías con el fin de que estos participen en las decisiones de inversión territorial. Este marco constitucional ha hecho que las comunidades y los ciudadanos tengan conciencia de su derecho de participación en las decisiones que afecten a sus territorios o localidades. Si relacionamos estas reformas constitucionales con la Responsabilidad Social Empresarial, se puede notar cómo el marco institucional sugiere el derecho de que los grupos de interés se reúnan y puedan participar en estrategias. También se puede indicar que a través de la participación ciudadana se busca controlar la corrupción, objetivo vinculado al décimo principio del Pacto Global de las Naciones Unidas, una de las herramientas más notorias para poder incluir a la Responsabilidad Social en las organizaciones (United Nations, 2016).

Como se señaló, los derechos y garantías están vinculados al *Sumak Kawsay*, entendido según lo establece la Constitución de la República del Ecuador como:

La satisfacción de las necesidades, la consecución de una calidad de vida y muerte dignas, el amar y ser amado, y el florecimiento saludable de todos y todas, en paz y armonía con la naturaleza y la prolongación indefinida de las culturas humanas. El Buen Vivir

supone tener tiempo libre para la contemplación y la emancipación, y que las libertades, oportunidades, capacidades y potencialidades reales de los individuos se amplíen y florezcan de modo que permitan lograr simultáneamente aquello que la sociedad, los territorios, las diversas identidades colectivas y cada uno, visto como un ser humano universal y particular a la vez, valora como objetivo de vida deseable (tanto material como subjetivamente, y sin producir ningún tipo de dominación a un otro). (Ramírez, 2008, p. 387)

Para alcanzar este ambicioso concepto interdisciplinar e intercultural, el Plan Nacional del Buen Vivir (PNBV) delimita 12 objetivos nacionales que tienen metas definidas, y que a su vez tienen vinculadas políticas públicas específicas. El PNBV es obligatorio para todas las instituciones públicas en el Ecuador, de acuerdo a la Guía metodológica de planificación institucional (Senplades, 2012); a su vez, la estrategia del Estado es que las empresas privadas, aunque no estén obligadas a seguir el PNBV, se alineen al mismo a través de mecanismos como el sistema de contratación pública. El PNBV dentro de sus objetivos presenta coincidencias con los intereses de la Responsabilidad Social Empresarial, ya que los objetivos referentes a derechos y libertades para el buen vivir tocan temas como el respeto de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, el fortalecimiento de las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, entre otros.

Por otro lado, los objetivos de transformación económica y productiva destacan las metas a alcanzar en lo relacionado al desarrollo productivo, el mercado y el trabajo; de los 12 objetivos del PNBV es necesario detenerse un momento en sus objetivos 1 y 7, ya que de forma puntual en el objetivo 1 se menciona a la responsabilidad social de las organizaciones públicas; mientras que en el objetivo 7 del PNBV se menciona a la Responsabilidad Social y Ambiental. Finalmente, las políticas 7.8 y 7.9 se enfocan en prevenir, controlar y mitigar la contaminación ambiental en los procesos de extracción, producción, consumo y posconsumo, así como en la promoción de formas de consumo conscientes, sostenibles y eficientes (Senplades, 2013).

La Responsabilidad Social ha tenido un espacio relativamente importante en la estructura de varios cuerpos normativos, no solo en

la Constitución y en el PNBV, sino también en otras leyes y reglamentos que han tenido el propósito de difundir su aplicación y generar mecanismos de control e incentivo. Lima y López (2012) exponen las principales leyes que forman el marco legal que orienta las Prácticas de Responsabilidad Social en las organizaciones en el Ecuador y mencionan documentos como la Ley orgánica del servicio público, Ley de economía popular y solidaria, Ley orgánica de transparencia y administración de la información pública, Ley orgánica de educación superior, Ley de hidrocarburos, Ley de protección al consumidor, Ley del régimen municipal, Ley de gestión ambiental, Ley de régimen provincial, Ley del sistema nacional de ciencia y tecnología, la Ordenanza municipal No. 333 de Quito y el Código del trabajo.

Como se señaló anteriormente a través de entrevistas, se pudo conocer la realidad de aplicación de este conjunto normativo de tal forma que se pudiese conocer si son demasiado estrictos o posiblemente muy laxos en lo que respecta a los aspectos de interés de la Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones, puntualmente el cuestionamiento fue: ¿considera que hay leyes o normativa suficiente para regular a las empresas ecuatorianas respecto al cumplimiento de estándares concordantes con la Responsabilidad Social Empresarial? La respuesta fue casi unánime al indicar que la normativa era excesiva y que en muchas ocasiones lo que hacía el Estado era proponer como ley un comportamiento responsable, desvirtuando dicho comportamiento y haciendo que las organizaciones no comprometidas “cumplan” la ley pero sin desarrollar un verdadero compromiso con el desarrollo sustentable. Por otro lado, los entrevistados destacaron la existencia de normativa pero la no existencia de organismos de control que hagan un seguimiento real de su aplicación a excepción de las leyes relacionadas al control ambiental donde el Ministerio de Ambiente trabaja constantemente para verificar que las empresas controlen los impactos ambientales que generan, motivando a que se implementen programas de producción más limpia, buen uso de recursos y manejo adecuado de desechos. La gran deuda pendiente en la aplicación de las leyes en materias de Responsabilidad Social Empresarial continúa siendo el pilar social.

Finalmente, el Distrito Metropolitano de Quito a través de su Municipio constituye uno de los principales esfuerzos a nivel local para incentivar y orientar a las empresas a poner en práctica la Responsabilidad Social Empresarial, esto a través de la Ordenanza N.º 333 del año 2010 y la renovada ordenanza N.º 084 de noviembre del 2015. Esta nueva ordenanza propone como eje una mayor participación de las empresas y la ciudadanía, cambiando el espíritu del anterior documento mismo que se enfocaba en otorgar premios a las empresas que cumplieran los estándares de responsabilidad social empresarial con base en los informes de sostenibilidad verificados por el GRI (ConQuito, 2015). La Ordenanza N.º 084 está articulada al Plan Metropolitano de Ordenamiento Territorial del Distrito Metropolitano de Quito 2015-2025, el cual tiene tres ejes estratégicos esenciales: 1) que Quito llegue a ser una Ciudad Inteligente que se adecúa a las necesidades de la gente, 2) que Quito se convierta en una Ciudad de Oportunidades, donde todos puedan tener oportunidades de crecimiento y progreso y 3) hacer de Quito una Ciudad Solidaria donde se viva mejor y exista equidad (Plan Metropolitano de Desarrollo y, 2015). El Municipio del Distrito Metropolitano de Quito

busca, por medio de la Responsabilidad Social, fomentar la corresponsabilidad entre los distintos actores que cohabitan en el territorio de manera de que cada uno actúe mitigando sus impactos y los de sus partes interesadas, incluyendo dentro de sus operaciones el triple balance de sus resultados en las esferas ambientales, sociales y económicas, teniendo siempre un correcto desempeño con la ética y la gobernanza para construir un Territorio Sostenible y Responsable. (ConQuito, 2015)

Los objetivos de la Ordenanza N.º 084 son: 1) fomentar, impulsar, capacitar, promover las prácticas de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible en el Distrito Metropolitano de Quito, 2) articular las acciones, programas y proyectos de responsabilidad social con base en la generación de alianzas público-privadas que permitan replicar experiencias, aprendizajes y buenas prácticas en función de las necesidades del Distrito Metropolitano y 3) identificar, documentar y

reconocer las prácticas de Responsabilidad Social en el Distrito Metropolitano. En la Ordenanza N.º 084 se da paso a la creación de varios cuerpos administrativos responsables de incentivar la Responsabilidad Social, tales como el Consejo Metropolitano de Responsabilidad Social, la Secretaría de Desarrollo Productivo y Competitividad y la Secretaría Técnica de Responsabilidad Social que en última instancia es la ejecutora del sistema para el fomento del Desarrollo Sostenible en el Distrito Metropolitano.

Para los expertos entrevistados, la ordenanza municipal es un buen ejemplo de lo que se podría considerar una normativa guía para poder apoyar al desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial y sería el camino a seguir por otros cantones a nivel nacional. Sin embargo, debido a que la creación de los organismos gubernamentales ejecutores es nuevo, aún falta camino por recorrer para poder madurar el sistema. Cabe destacar que los expertos entrevistados hicieron énfasis en que la Responsabilidad Social Empresarial es casi un tema desconocido por las Pymes y Mipymes, preocupación que comparte la Ordenanza N.º 084, la cual dedica gran parte de su texto al fomento del crecimiento de la responsabilidad de las empresas en esos sectores que abarcan aproximadamente el 90 % del total de las empresas ecuatorianas.

Si bien la normativa de un país o región no es el único factor que causa la propagación de la Responsabilidad Social Empresarial en un país, en el caso del Ecuador se puede notar que la normativa ha acompañado el despertar de las empresas hacia el paradigma sustentable. En este sentido, es evidente un incremento del 38 % del total de las memorias presentadas desde el inicio del GRI en 1999. En el período comprendido entre 1999 y el 2016, 110 memorias han sido reportadas por empresas ecuatorianas, a un promedio anual de 6 memorias de sostenibilidad por año. Las principales industrias que reportan las memorias de sostenibilidad son el sector financiero, las empresas de bebidas y alimentos, productos de cuidado de la salud y energía.

Según las memorias de sostenibilidad reportadas al GRI en los años 2014 y 2015, en comparación con otros países de América Latina, el Ecuador presenta una tendencia de crecimiento en el número de publicaciones de memorias al igual que Perú, Venezuela y Bolivia. Mientras

que, por otro lado, países como Brasil, Colombia, Argentina y Chile, han estabilizado el número de empresas que presentan sus memorias. Esto deja en evidencia que en el Ecuador el concepto de Responsabilidad Social Empresarial aún tiene oportunidades de expandirse a otras organizaciones y no ha llegado a un punto de saturación.

Los *stakeholders* que las empresas ecuatorianas consideran en su estrategia

Otro aspecto evaluado con la entrevista fue ¿cuáles son los *stakeholders* más comunes por los cuales las empresas ecuatorianas se preocupan y de todos ellos cuál considera usted que es el más destacado, por el que más se preocupan, en el que más invierten en proyectos? Frente a esta pregunta los expertos primeramente diferenciaron las empresas y grupos de interés por industria. Dependiendo del giro del negocio, por ejemplo, en el sector extractivo, el grupo de interés más importante es la comunidad, mientras que para las empresas de servicios, los grupos de interés con mayor atención son los clientes y el público interno; para el sector agroindustrial uno de los grupos de interés más poderoso son los proveedores. De forma general, los expertos pudieron identificar a cuatro grupos de interés destacados en casi todos los sectores: los clientes, los trabajadores, los proveedores y los accionistas.

Esta apreciación se sustenta aún más con la revisión de las memorias de sostenibilidad presentadas al GRI por las empresas ecuatorianas en el año 2015, veinte y tres empresas. De este grupo de organizaciones se obtiene que una es pequeña empresa (4,54%), tres se declaran medianas empresas (13,64%) y diecinueve se consideran grandes empresas (81,82%). Las empresas del Servicios Financieros representan el 45% de las empresas que presentaron sus memorias de sostenibilidad al GRI, seguidas por las empresas de Alimentos y Bebidas que representan el 18%, mientras que los sectores de Agricultura, Servicios comerciales, Construcción, Materias de Construcción, Energía, Cuidado de la Salud, Textiles, y Agua representan el 4,55% cada uno. Dentro de las memorias analizadas se lograron identificar los siguientes *stakeholders*: Colaboradores, Casa Matriz, Clientes, Brokers, Proveedores y

contratista, Organismos de control, Comunidad, Accionistas, Organizaciones no Gubernamentales, Medios de comunicación, Corresponsable no bancarios, Aliados, Medio ambiente, Distribuidores, Socios de venta, Gobierno corporativo y Socios cooperativistas. Cabe destacar que se respetó la denominación de las empresas para definir sus grupos de interés, por lo que algunos pueden ser similares, como por ejemplo Brokers y Distribuidores.

Con esta información se identificó cuáles eran los grupos de interés más destacados en las memorias, la identificación se la realizó cuantificando el espacio en la memoria destinados a los grupos de interés e identificando los cuatro *stakeholders* más importantes para cada una de las empresas. Se ponderó con 9 puntos al más destacado, 6 puntos al segundo más destacado, 3 puntos al tercero más destacado y 1 punto al cuarto más destacado.

Con base en este análisis se observa que las empresas consideran que su *stakeholder* más importante es el grupo de los Colaboradores, seguidos de los Accionistas, en tercer lugar se encuentran los Clientes y en cuarto lugar la Comunidad. Se recuerda que los expertos entrevistados no destacaron a la Comunidad como un *stakeholders* importante el cual en las memorias de las empresas ecuatorianas juega un rol fundamental. Los expertos consideraban a los proveedores y contratistas por sobre la comunidad y la evidencia muestra que por mucho más del doble la comunidad se impone por sobre los proveedores en el índice de ponderación.

En este punto se debe aclarar que la intención de este análisis no era identificar el más importante de los grupos de interés para las empresas, ya que el enfoque de Responsabilidad Social Empresarial no considera una jerarquía en *stakeholders*, la intención de los datos presentados es evidenciar únicamente la importancia que las empresas les dan a determinados grupos por sobre otros en sus memorias.

Sobre la base de la información anterior se consultó a los entrevistados qué opinaban de la relación de las empresas y la Responsabilidad Social Empresarial en su estrategia. Los resultados obtenidos indican que las empresas ecuatorianas que adoptan la Responsabilidad Social Empresarial en su estrategia realmente se comprometen con quienes definen como sus *stakeholders*, pero este compromiso no

necesariamente se traduce en una participación activa en la estrategia organizacional; a su vez, se destaca que los procesos de planificación estratégica incluyen un mapeo de los *stakeholders* pero ninguna organización incluye a representantes del mismo para poder plantear la planificación organizacional de cara a los requerimientos o aportes que puedan hacer los grupos de interés. Finalmente, indicaron que las empresas han entendido que es importante crear canales de comunicación con los *stakeholders* para poder escuchar sus demandas e inquietudes. En resumen, según los expertos, los *stakeholders* son actores con voz pero sin voto en los designios estratégicos empresariales en el Ecuador, contradiciendo lo recomendado por los modelos de Responsabilidad Social Empresarial que hacen énfasis en procesos participativos.

Conforme a lo indicado, siendo los Colaboradores el grupo de interés con mayor reconocimiento por las empresas, las acciones más mencionadas y que crean una fuerte relación con este grupo de interés son la capacitación, la creación de un buen ambiente laboral, salarios competitivos, generar estabilidad laboral, apoyar al desarrollo personal y desarrollo profesional dentro o fuera de la empresa, actividades de integración con la familia, actividades recreacionales, desarrollo de la cultura organizacional en los trabajadores y preocupación por seguridad y salud ocupacional. Cabe destacar que en muchos casos las empresas reportan en sus memorias el cumplimiento de la ley laboral en el Ecuador como resultado de sus acciones de Responsabilidad Social Empresarial como es el caso de licencias por maternidad, inclusión de personas con discapacidades entre sus empleados, cumplimiento de normativa de salud ocupacional, entre otros. Este fenómeno también se presenta cuando las empresas hablan de su *stakeholders* Medio Ambiente. Lo reportado en las memorias responde a la legislación ecuatoriana, que como analizamos anteriormente es una de las más exigentes y con mayores controles de cumplimiento. Pocas son las empresas que en sus memorias reportan esfuerzos más allá de lo estipulado por ley.

Las acciones más comunes que las empresas reportan en sus memorias respecto de su relación con la comunidad abarcan elementos como donaciones a través de fundaciones, capacitación a la comunidad, apoyo a actividades educativas de niños y jóvenes, inversión en infraestructura básica, apoyo a las necesidades de la comunidad. Casi

el 50% de las organizaciones estudiadas tienen una fundación a través de la cual hacen donaciones a causas que no tienen nada que ver con el giro del negocio de la organización. Si bien son actividades loables, las empresas las cofunden con estrategias o las realizan para poder reportarlas en sus memorias dejando en evidencia que no son pocas las empresas ecuatorianas que todavía no tienen muy claro lo que es la Responsabilidad Social Empresarial.

Reflexiones

El marco legal existente en el Ecuador es amplio en lo que respecta a Responsabilidad Social Empresarial; sin embargo, una de las grandes falencias es su falta de aplicación y control. Por otro lado, es importante destacar que las empresas ecuatorianas que elaboran memorias de sostenibilidad muchas veces reportan en sus resultados el cumplimiento de la legislación nacional como avance en sus relaciones con sus grupos de interés. Por tanto, las organizaciones requieren concientizarse para poder alcanzar un desarrollo que vaya un poco más allá del clásico desarrollo sostenible. Si bien la Constitución de la República como el PNBV pueden fungir como guía en todas las actividades público o privadas vinculadas con la Responsabilidad Social Empresarial, no existe una aplicación en las empresas públicas puesto que estas no han reportado memorias de sostenibilidad en el periodo analizado, detalle no menor ya que el PNBV y la Constitución de la República son obligatorios para empresas públicas; esto lleva a concluir que si bien el marco institucional puede apoyar a las organizaciones no necesariamente es garantía de que las empresas hagan públicas sus estrategias sustentables a través de herramientas como las memorias de sostenibilidad.

La mayoría de esfuerzos concretos en lo que respecta a este tema se han dado a nivel cantonal, más allá de que el Ecuador cuenta con la inclusión de los derechos de la tierra en su Carta Magna y la inclusión del desarrollo sostenible ampliado en su plan de desarrollo.

Aunque las estrategias sustentables sean relativamente nuevas para las empresas ecuatorianas, se puede observar un crecimiento en

el número de empresas que presentan sus memorias de sostenibilidad al GRI. Las principales empresas del país ya tienen estrategias de Responsabilidad Social Empresarial definidas, principalmente las grandes empresas de agroalimentos, con estructuras organizadas en función de alcanzar metas en los campos económico, social y ambiental. Otro sector a destacar en el sector de Servicios Financieros.

Según los datos recolectados, son los *stakeholders* Colaboradores, Accionistas, Clientes y las Comunidades los que tienen mayores programas de atención. Esto deja en evidencia que las empresas ecuatorianas primero trabajan para sus *stakeholders* internos y luego miran a sus *stakeholders* externos, buscando primero que sus colaboradores se sientan a gusto con su trabajo y que los accionistas tengan el rendimiento esperado. Las empresas le dan un peso importante al pilar social de la sustentabilidad. En algunos casos este se antepone al económico y definitivamente el pilar que tiene menores atenciones en las memorias de sostenibilidad es el ambiental.

Para finalizar, se puede concluir que los estudios relacionados a la Responsabilidad Social Empresarial en Ecuador aún son incipientes, este pequeño esfuerzo fue realizado para ayudar a las empresas, para plantear o replantear sus estrategias, para el Gobierno en función de mejorar el marco regulatorio vigente y para los organismos que agrupan a las empresas sustentables para conocer no solo los avances en el tema, sino en identificar las fortalezas y debilidades de las empresas ecuatorianas en sus esfuerzos por alcanzar el Desarrollo Sostenible y para que sus esfuerzos sean canalizados de mejor manera.

Referencias

- Cóndor Salazar, M. (2016). Los derechos de la naturaleza en la constitución de la República del Ecuador. *Revista Republicana*, 20, 207-224. Recuperado de <https://doi.org/10.21017/rev.repub.2016.v20.a9>
- ConQuito. (2015). Responsabilidad Social. Recuperado el Junio de 2016. Agencia de Promoción Económica. Recuperado de <http://www.conquito.org.ec/responsabilidad-social/>
- Correa Olivo, H. e Ibarra Mares, A. (2009). Retrospectiva da Responsabilidade Social Corporativa através do. *Revista Universo Contábil*, 5(4), 116-133. doi:10.4270/ruc.2009434
- Dos Santos, T. y Fernández, J. S. (2012). Estados Unidos. Más allá de la crisis. (1.ª ed.). En D. Castillo Fernández y M. A. Gandásegui (eds.). *México. México: Siglo XXI*. Recuperado de <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/coediciones/20130206104027/EstadosUnidosMasalladelacrisis.pdf>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Boston: Pitman.
- Global Reporting Initiative. (2016). *Global Reporting Initiative*. Recuperado el 9 de junio de Sustainability Disclosure Data Base: <http://database.globalreporting.org/>
- Grijalva, A. (16 de julio de 2009). Principales innovaciones en la Constitución de Ecuador del 2008. Recuperado el 2016, de Instituto de investigación y de debate sobre la gobernanza: <http://www.institut-gouvernance.org/es/analyse/fiche-analyse-454.html>
- Kliksberg, B. (1997). Repensando el Estado para el desarrollo social: más allá de dogmas y convencionalismos. *Reunión Mundial de Expertos convocada por la División de Gobernabilidad, Administración Pública y Finanzas de la Organización de las Naciones Unidas* (pp. 139-186). New York.
- Lima, M., & López, M. (2012). Alianza para el Desarrollo Iniciativas de Reducción de la Pobreza Eficientes y Sostenibles a través de una Cooperación Innovadora entre ONG, Personas, Sector Público y Universidades del Ecuador. (A. e. desarrollo, ed.) Recuperado el 2016, de Fundación Codespa: http://www.gestrategica.org/templates/listado_recursos.php?id_rec=1092&id_cl=1
- Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. (Febrero, 2015). Recuperado en junio de 2016, de Municipio de Quito: <http://>

gobiernoabierto.quito.gob.ec/wp-content/uploads/documentos/interactivos/PLAN/files/assets/downloads/publication.pdf

Ramírez, R. (2008). *Igualmente pobres, desigualmente ricos*. Quito: Editorial Ariel. Recuperado de <http://reneramirez.ec/igualmente-pobres-desigualmente-ricos/>

Senplades. (2012). *Guía Metodológica de Planificación Institucional*. (2.^a ed.). Quito: Senplades. Obtenido de Guía Metodológica de Planificación Institucional: <http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/GUIA-DE-PLANIFICACION-INSTITUCIONAL.pdf>

Senplades. (2013). *Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017*. Montecristi: Senplades.

United Nations. (2016). *The Ten Principles of the UN Global Compact*. Recuperado el 11 de junio de 2016, de United Nations Global Compact.

WCED. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*. Oxford: Oxford: Oxford University Press.